

Quinto.-Los modelos públicos de los estados financieros serán de uso obligatorio por las Entidades en sus Memorias anuales, no pudiendo modificarlos ni suprimir ninguno de los conceptos, que deberán figurar siempre aunque tengan un saldo nulo, sin perjuicio de los mayores desgloses que voluntariamente quieran revelarse.

Los datos publicados por las Entidades en sus Memorias, revistas, folletos, boletines o anuncios, sea cual sea el medio de comunicación utilizado, deberán corresponderse con los que se contengan en los estados públicos y reservados.

Sexto.-Los estados de carácter reservado estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 24/1988, en cuanto a su uso y divulgación. No obstante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá efectuar la publicación agregada de los datos reservados que, a efectos estadísticos, considere conveniente.

Séptimo.-Los estados financieros establecidos de acuerdo con los modelos y normas que en uso de la facultad conferida en la presente Orden establezca la Comisión Nacional del Mercado de Valores se entenderá que cumplen los requisitos que, en su caso, se exijan o puedan exigirse sobre planificación contable, en especial a efectos de lo establecido en el apartado b) del artículo 2.º 2, de la Ley 19/1988, de 12 de junio, de Auditorías de Cuentas, y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre el Impuesto de Sociedades o de cualquier otro tributo.

Octavo.-Las Entidades a que se refiere esta Orden remitirán a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera un ejemplar de sus estados financieros de carácter público y de su correspondiente informe de auditoría.

#### DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de julio de 1989.

SOLCHAGA CATALAN

#### 17971 RESOLUCION de 15 de julio de 1989, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, por la que se actualiza el Arancel Integrado de Aplicación TARIC.

Conforme a lo establecido en la Orden de este Departamento, de 14 de diciembre de 1987 («Boletín Oficial del Estado» del 23) por la que se implantó en España el denominado Arancel Integrado de Aplicación (TARIC) de las Comunidades Europeas, y de acuerdo con la previsión contemplada en su prevención tercera, según la cual corresponde a este Centro directivo, entre otras, la adopción de cuantas medidas fuesen necesarias para mantener en permanente nivel de actualidad aquel instrumento de servicio, fue dictada la Resolución de esta Dirección General, de 1 de diciembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 21), estableciendo la nomenclatura TARIC, que habría de estar vigente desde el 1 de enero de 1989.

Posteriormente, y habiéndose modificado por Orden de 20 de marzo de 1989 la Ordenanza Reguladora del Arbitrio de Entrada de Mercancías en las islas Canarias, con el fin de acomodar la nomenclatura de dicha exacción a la estructura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías, vigente en la Comunidad Económica Europea, fue modificada, a su vez, la nomenclatura y codificación TARIC, de 1 de diciembre de 1988, por la de 20 de marzo de 1989 (Resolución de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, «Boletín Oficial» de 1 de abril), vigente en la actualidad.

Sin embargo, las sucesivas modificaciones habidas en diferentes ámbitos de aplicación del TARIC comunitario (estructura, derechos, suspensiones, contingentes), así como la inclusión en el TARIC de determinadas medidas nacionales (productos incluidos en los apartados A y B del apéndice del Arancel, inspección de cultivos marinos, productos químicos prohibidos o restringidos) son circunstancias todas ellas que demandan una puesta al día de la situación, al objeto de que su finalidad principal de constituir un instrumento riguroso de aplicación a la cambiante realidad de la materia, pueda ser mantenida como respuesta atemperada a la exigencia más actual del presente.

Por ello, esta Dirección General, en uso de la autorización que le ha sido conferida al respecto (Orden de 14 de diciembre de 1987) ha tenido a bien resolver:

Primero.-Queda actualizada la nomenclatura y codificación TARIC, establecida por anterior Resolución de este Centro directivo, de 1 de diciembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 21), modificada que fue por la también Resolución de esta Dirección General, de 20 de marzo de 1989 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril).

Segundo.-La presente edición actualizada de la nomenclatura y codificación TARIC, entrará en vigor y será de aplicación a partir del próximo 15 de septiembre de 1989.

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos.

Madrid, 15 de julio de 1989.-El Director general, Humberto Ríos Rodríguez.

#### 17972 RESOLUCION de 19 de julio de de 1989, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se somete al régimen de contingentación las exportaciones de cenizas, residuos, desperdicios y desechos de cobre y sus aleaciones.

El Reglamento CEE número 4249/88 del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, establece el régimen de exportación comunitario de determinados desperdicios y desechos de metales no ferrosos.

Como consecuencia de la difícil situación de abastecimiento que atraviesa la industria refinadora comunitaria de materias de cobre, el mencionado reglamento establece contingentes comunitarios para la exportación de cenizas, residuos, desperdicios y desechos de cobre y sus aleaciones.

La Orden de 27 de agosto de 1986, por la que se modifican determinados preceptos de diversas Ordenes sobre Comercio Exterior, autoriza el Secretario de Estado de Comercio para introducir modificaciones en el régimen de comercio cuando se trate de poner en ejecución normas comunitarias que así lo requieran.

En consecuencia, dispongo:

Primero.-Quedan sometidos al régimen de contingentación comunitaria las exportaciones a terceros países de cenizas, residuos, desperdicios y desechos de cobre y sus aleaciones, correspondientes a los códigos NC ex. 2620 y ex. 740400, requiriendo, en consecuencia, la expedición del documento denominado «Autorización administrativa de exportación», establecido en el artículo 7.º de la Orden de 21 de febrero de 1986 por la que se regula el procedimiento y tramitación de las exportaciones.

Segundo.-Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos hasta el 31 de diciembre de 1989.

Madrid, 19 de julio de 1989.-El Secretario de Estado, Apolonio Ruiz Ligeró.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

## MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

#### 17973 REAL DECRETO 937/1989, de 21 de julio, por el que se regula la concesión de ayudas del Plan Nacional de Residuos Industriales.

El artículo 11.1 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, establece la obligación de la Administración del Estado de formular un Plan, con validez para todo el territorio nacional, con objeto de racionalizar y coordinar la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, incluyéndose en el indicado Plan, objetivos específicos, programas y acciones a desarrollar, contenidos mínimos y medios de financiación.

En cumplimiento del mandato legal, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 10 de marzo de 1989, aprobó un Plan Nacional, que crea el marco adecuado para garantizar el tratamiento o eliminación de los residuos y fomentar las técnicas tendentes a reducir su generación. El citado Plan comprende nueve programas y un sistema de incentiva-ción de la iniciativa pública y privada.

La presente disposición establece el régimen jurídico de las ayudas previstas en el Plan, sin olvidar la intervención de las Comunidades Autónomas en el procedimiento de su concesión y en las Comisiones de Trabajo del Consejo Rector, como órgano coordinador en la tramitación de los expedientes relativos a tales ayudas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de julio de 1989.

#### DISPONGO:

Artículo 1.º El presente Real Decreto tiene por objeto regular la concesión de las ayudas previstas en el Plan Nacional de Residuos Industriales a los proyectos acogidos al mismo.

Art. 2.º Las ayudas a otorgar para la ejecución de los proyectos acogidos a los beneficios del Plan serán:

1. Subvención a fondo perdido de hasta el 15 por 100 neto de la inversión aprobada en los expedientes de acogimiento a los programas:

a) De inversiones en infraestructura de servicios de gestión de residuos.

b) De fomento y tratamiento «in situ» y de actividades de recuperación.

- c) De fomento de tecnologías limpias.  
d) De eliminación de policlorobifenilos y policloroterfenilos (PCB's y PCT's).

2. Subvención a fondo perdido de hasta el 30 por 100 bruto de la inversión aprobada, que realicen directamente las Administraciones Públicas, comprendida en los programas a) y d) del punto 1 anterior.

3. Subvención a fondo perdido sobre el kilogramo de aceite gestionado en las condiciones que anualmente fije el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, para gestores autorizados que se acojan al programa de reutilización de aceites usados, al objeto de sufragar los costes no cubiertos de los servicios.

4. Participación de hasta un 50 por 100 en las inversiones directas de las Administraciones Públicas que se acojan al programa de identificación, control y recuperación de espacios afectados por residuos industriales, y aprobadas conforme se establece en el presente Real Decreto.

Art. 3.º 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que deseen acogerse a los programas previstos en el punto 1 del artículo 2.º deberán dirigir la correspondiente solicitud al órgano competente de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se pretenda realizar la actividad para la que se solicita la ayuda. Las solicitudes deberán acompañarse, al menos, de la documentación que para cada programa se señale por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

2. Cuando los proyectos acogidos al Plan Nacional se realicen directamente por una Administración Pública, se estará a lo convenido en cada caso dentro de los límites establecidos en este Real Decreto.

3. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que deseen acogerse al programa indicado en el punto 3 del artículo 2.º, solicitarán los beneficios en la forma y condiciones que se determinen por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Art. 4.º La solicitud y documentación correspondiente, a que se refiere el artículo anterior, serán remitidas por la Comunidad Autónoma, juntamente con su informe o propuesta al Consejo Rector quien, una vez realizados los estudios o informes exigidos, propondrá al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo la resolución que proceda.

En los proyectos de contenido industrial, energético o tecnológico, el Consejo Rector elaborará la propuesta, valorando prioritariamente el informe que presente el Ministerio de Industria y Energía.

Art. 5.º Se constituye un Consejo Rector como órgano encargado de coordinar y racionalizar la concesión de las ayudas previstas en el Plan Nacional y cuyas funciones serán:

a) La recepción de los expedientes de acogimiento a los beneficios del Plan que remitan las Comunidades Autónomas.

b) La solicitud de los informes técnicos, económicos y financieros que estime necesarios en relación con el proyecto contenido en cada expediente de acogimiento a los beneficios del Plan.

Cuando se trate de proyectos de carácter industrial o tecnológico se recabará el previo informe del Ministerio de Industria y Energía.

c) La propuesta al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de la resolución relativa a cada expediente de acogimiento a los beneficios del Plan, con indicación de las ayudas que procede otorgar y las condiciones a exigir.

Art. 6.º 1. El Consejo Rector, que estará adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente: El Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo.

Vicepresidente primero: El Director general del Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Vicepresidente segundo: El Secretario general técnico del Ministerio de Industria y Energía.

Vocales: Un representante con categoría de Director general de los siguientes Ministerios:

Obras Públicas y Urbanismo; Economía y Hacienda; Industria y Energía; Agricultura, Pesca y Alimentación; Transportes, Turismo y Comunicaciones; Administraciones Públicas; Sanidad y Consumo, y Educación y Ciencia.

Secretario: Un funcionario de la Dirección General del Medio Ambiente, con nivel orgánico de Subdirector general.

2. El Consejo Rector ajustará su funcionamiento a las normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo para los órganos colegiados.

El Presidente será sustituido, en casos de ausencia o enfermedad, por el Vicepresidente primero; pudiendo cada uno de los Vocales delegar su asistencia y funciones en uno de los Subdirectores generales de ellos dependientes que al efecto determinen.

3. El Consejo Rector, a través del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, elevará trimestralmente a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y cuando ésta lo requiera, una Memoria explicativa de las ayudas concedidas con cargo al Plan de Residuos Industriales.

Art. 7.º En el seno del Consejo Rector se podrán constituir Comisiones de trabajo para cada Comunidad Autónoma, con la función de establecer la necesaria coordinación en la tramitación de los expedientes de acogimiento al Plan y de concesiones de los beneficios previstos en el mismo.

Cada Comisión estará integrada por tres Vocales del Consejo Rector, que representen, respectivamente, a los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo; Industria y Energía, y Agricultura, Pesca y Alimentación, y otro, designado por el propio Consejo en función de la naturaleza de las características del proyecto, así como por idéntico número de representantes de la Comunidad Autónoma afectada. Actuará como Presidente el Vicepresidente primero o persona en quien delegue, y como Secretario un funcionario de la Dirección General del Medio Ambiente.

Art. 8.º 1. Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo la concesión de las ayudas previstas en el Plan Nacional de Residuos Industriales cuando la cuantía de la inversión subvencionable sea igual o menor a 1.000 millones de pesetas.

2. Cuando la inversión subvencionable sea superior a los 1.000 millones de pesetas, la resolución corresponderá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo.

Art. 9.º 1. Las subvenciones que se concedan a los proyectos acogidos a los Programas citados en el punto 1 del artículo 2.º, serán compatibles con otras subvenciones o ayudas que pudieran corresponderles, sin que puedan superar, en su conjunto, los topes establecidos en las normas que las regulen.

2. La subvención a los proyectos acogidos al Programa citado en el punto 3 del artículo 2.º, será incompatible con otras ayudas que con el mismo objeto pudieran ser otorgadas por cualquiera Administración Pública.

Art. 10. Sin perjuicio de las funciones de control y seguimiento que realicen las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo velará por el cumplimiento de las condiciones exigidas para la concesión de las subvenciones y por la correcta realización de las inversiones previstas, pudiendo para ello realizar las inspecciones y comprobaciones oportunas, así como recabar la información que se considere necesaria de los beneficiarios de tales ayudas.

Art. 11.1 En los supuestos de falsedad, inexactitud u omisión en los datos suministrados para la solicitud de subvenciones, o incumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión, se producirá la pérdida total o parcial de las ayudas recibidas, debiendo el beneficiario reintegrar a la Administración la cantidad que hubiera percibido con los intereses que correspondan, sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de los preceptos del Código Penal sobre delito fiscal.

2. En el caso de incumplimiento de las condiciones pactadas por parte de las Empresas acogidas al Plan, la Administración del Estado podrá ejercitar la acción de responsabilidad contra sus administradores, por los daños ocasionados al Estado.

Art. 12. Si la resolución recaída otorgara subvención a la realización del proyecto, objeto del expediente, por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se procederá a efectuar la transferencia del importe a que asciende la citada subvención, en los términos y plazos fijados en la propia resolución ministerial, a la Comunidad Autónoma receptora de la solicitud con asignación nominativa para que ésta la satisfaga al beneficiario, previo el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación vigente y en la propia resolución.

#### DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se faculta al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Segunda.—El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 1989.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo,  
JAVIER LUIS SAENZ COSCULLUELA

**17974** RESOLUCION de 24 de julio de 1989, de la Subsecretaria, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Industriales y se constituye la Comisión de Seguimiento del mismo.

Aprobado el Plan Nacional de Residuos Industriales y constituida su Comisión de Seguimiento por Acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado en su reunión del día 10 de marzo de 1989, se dispone la publicación del texto del citado acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», a los fines previstos en su apartado quinto.

Madrid, 24 de julio de 1989.—El Subsecretario, Javier Maulcón Alvarcz de Linera.